



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020)

RADICADO:	11001-33-35-026-2018-00216-00
TIPO DE PROCESO:	EJECUTIVO
EJECUTANTE:	MARÍA EUGENIA GALLEJO MEJÍA
EJECUTADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ORDINARIO:	110013331026-2008-00131-00

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de embargo y secuestro formulada por la parte actora, sobre las cuentas de ahorros y corrientes que, según la ejecutante, tiene la entidad ejecutada en las entidades bancarias que señala a folio 7 del plenario, previos los siguientes,

1. ANTECEDENTES

Mediante sentencia proferida el 26 de marzo de 2010, este Despacho Judicial, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y condenó a la **Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, a reajustar el valor de la pensión de jubilación reconocida a la señora María Eugenia Gallego Mejía, en los parámetros establecidos en la parte motiva y resolutive del mentado fallo.

Que la sentencia antes mencionada, fue objeto de apelación, y a través de proveído de data 9 de febrero de 2012, el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”, confirmó en su integridad la sentencia proferida por este Despacho Judicial.

La sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el **10 de abril de 2012**, tal y como consta a folio 9 del expediente.

La parte ejecutante, presentó solicitud de cumplimiento al fallo proferido el **27 de julio de 2012**, tal y como lo señala la Secretaría de Educación de Bogotá, en la Resolución No. 1071 de 12 de febrero de 2014.

Mediante **Resolución No. 1071 de 12 de febrero de 2014**, la Secretaría de Educación de Bogotá, dio cumplimiento a un fallo judicial, ajustando la

pensión vitalicia de jubilación a favor de la ejecutante, reconociendo y pagando para el efecto los siguientes valores:

CONCEPTO	DESDE	HASTA	TOTAL
Diferencias pensionales	09/10/2006	22/12/2013	\$38.358.181.00
Indexación	09/10/2006	10/04/2012	\$2.570.855.00
Intereses Corrientes	27/07/2012	26/08/2012	\$377.082.00
Intereses Moratorio	27/08/2012	30/12/2013	\$7.828.048.00
Total			\$49.134.196.00

De acuerdo con lo anterior, la parte actora a través de escrito radicado ante la Oficina de Apoyo Judicial el 22 de marzo de 2018¹, eleva demanda ejecutiva, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener el pago de los intereses corrientes y moratorios derivados de la sentencia judicial que funge como título ejecutivo, por la suma total de **DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$18.085.805.75) m/cte.**

Lo anterior, por cuanto según el apoderado judicial de la ejecutante, la entidad ejecutada no dio estricto cumplimiento al fallo judicial, por cuanto, no canceló los intereses moratorios, en virtud de lo establecido en los artículos 176 y 177 del CCA, orden que fuera impartida en el numeral séptimo de la parte resolutive de la sentencia proferida en primera instancia.

Debe destacar el Despacho, que la demanda radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial, fue repartida inicialmente al Juzgado 46 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, tal y como se puede corroborar en el acta de reparto visible a folio 69 del libelo demandatorio; y que a su vez, el Despacho en comento, a través de proveído de data 19 de abril de 2018², declaró su falta de competencia para conocer del asunto, fundamentando su decisión en el artículo 156 del C.P.A.C.A, teniendo en cuenta que fue este Estrado Judicial, quien profirió la sentencia de primera instancia.

2. CONSIDERACIONES

El apodero judicial de la parte ejecutante, solicita se decreten medidas cautelares de la siguiente forma:

“(…) en virtud del poder adjunto a mi conferido por el (la) señor (a) MARISA EUGENIA GALLEGO MEJICA, que con el presente escrito y con el propósito que las pretensiones de la ACCION EJECUTIVA que se ha presentado, no sean ilusorias, le solicito respetuosamente se decreten MEDIDAS CAUTELARES en aplicación del artículo 599 del C.G.P. sobre las cuentas que denunció como de propiedad de la ejecutada:

¹ Folio 1
² Folios 71-72

1. El embargo y secuestro previos de las sumas de dinero depositadas en las cuentas de ahorros y corrientes que la demandada tiene a su nombre en los bancos: BANCOLOMBIA S.A., DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., BBVA Y BANCO POPULAR, y los depósitos que se produzcan, hasta la suma estipulada en el artículo 599 del C.G.P.

Solicito señor juez, librar los oficios correspondientes para que las sumas retenidas sean puestas a disposición del juzgado, por intermedio del Banco Agrario-Sección de Depósitos Judiciales-dentro de los tres días, so pena de responder por los perjuicios que su incumplimiento ocasionen (art 1387 del C. de Co.) del correspondiente pago y de incurrir en multa conforme a lo previsto en los numerales 4 y 10 del art 593 del C.G.P.”

2.1. Problema jurídico

Se circunscribe en determinar si resulta procedente el embargo y secuestro de las cuentas no identificadas por el ejecutante, que según manifiesta en el escrito de medida cautelar, son cuentas de ahorros y corrientes, que tiene la entidad ejecutada a su nombre en los bancos Davivienda, BBVA, Bancolombia, y Popular.

Antes de continuar, el Despacho debe señalar, que el apoderado judicial de la parte actora, no fue claro en su escrito al momento de solicitar la medida cautelar, pues no sustentó las razones fácticas y jurídicas por las cuales debería decretarse las medidas cautelares solicitadas, sino que se enmarcó en solicitar el embargo y secuestro de las sumas depositadas en las cuentas de ahorro y corrientes que la entidad ejecutada tiene a su nombre en los bancos Davivienda, Bancolombia, BBVA y Banco Popular, sin identificar de manera plena los números de las cuentas a embargar, esto con el fin de poder realizar las actuaciones correspondientes.

2.2. Tesis del despacho

El Despacho recuerda en primera medida, que dada la prohibición legal expresa contenida en el numeral 1 del art. 594 del Código General del Proceso, no resulta procedente el embargo de recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, así como tampoco los recursos parafiscales con destinación específica para la seguridad social. Ahora bien, aunque la Corte Constitucional³ ha establecido como excepción a la regla general de inembargabilidad, el pago de providencias judiciales, y de las demás obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de las entidades públicas, particularmente, en caso de acreencias laborales, las cuales gozan de una protección constitucional especial, cuando se ha arribado a esa conclusión se ha estado frente a recursos de la Nación y no frente a recursos parafiscales como en el caso concreto.

Tratándose propiamente de recursos parafiscales, si bien podría considerarse que es posible embargar los recursos parafiscales destinados a la seguridad social, siempre y cuando, la obligación cuyo pago se persigue tenga por objeto

³Corte Constitucional. Entre otras sentencias: C- 546 de 1992, C- 1154 de 2008, C- 566 de 2003, C-1154 de 2008, T-873 de 2012 y C-543 de 2013.

la misma destinación específica, en el presente asunto, no sería posible decretar la medida solicitada, como quiera que, (i) **la destinación específica de esos recursos parafiscales es la seguridad social en pensiones y** (ii) **la medida cautelar de embargo, solicitada por la ejecutante, tiene como objeto asegurar el pago de intereses moratorios entendidos como aquellos que se pagan a título de indemnización por perjuicios que padece el acreedor por la mora en que incurre la entidad para hacer efectivo el pago de la obligación.**

2.3. De las medidas cautelares en el proceso ejecutivo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del C.P.A.C.A. la regulación de las medidas cautelares dentro de un proceso ejecutivo se rige al tenor de lo dispuesto en el art. 599 y siguientes del Código General del Proceso, toda vez que, en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo⁴.

Dicho lo anterior, se procede a citar el art. 599 del Código General de Proceso:

“Artículo 599. Embargo y secuestro. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante.

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.

En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.

⁴ Consejo de Estado. Sección Segunda. Sub. B. CP. Sandra lisset Ibarra Vélez. Rad. 68001 23 33 000 2016 01034 01 (1915 – 2017). Agosto 8 de 2017

La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público.

Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse también por el asegurado o beneficiario directamente ante la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio.

Parágrafo. *El ejecutado podrá solicitar que de la relación de bienes de su propiedad e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en garantía real. El juez, previo traslado al ejecutante por dos (2) días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes, con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores.”*

2.4. De los recursos de la Nación, de la seguridad social y excepción de inembargabilidad sobre sus rentas

Para comprender cuáles son los recursos de la Nación, se traerá a colación el Estatuto Orgánico del Presupuesto - Decreto 111 de 1996, que señaló:

“IV. Del presupuesto de rentas y recursos de capital:

ARTÍCULO 11. *El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes:*

a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de (i) los ingresos corrientes de la Nación; (ii) de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, (iii) de los fondos especiales, (iv) los recursos de capital y (v) los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional;

(...)

ARTÍCULO 19. *Inembargabilidad. Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.*

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4º del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta,

(...)

ARTÍCULO 29. *Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.*

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que formen parte del presupuesto general de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía

y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración.”

De la norma expuesta, se concluye que el presupuesto de rentas y recursos de capital de la Nación se compone de: **(i)** Ingresos corrientes, **(ii)** Contribuciones parafiscales, **(iii)** Fondos especiales, **(iv)** Recursos de capital e **(v)** Ingresos de establecimientos públicos del orden nacional.

Adicionalmente, la norma en su art. 19 indicó que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. En este punto el despacho estima pertinente indicar que la Corte Constitucional⁵ ha establecido algunas excepciones a la inembargabilidad de los recursos que conforman los ingresos del Presupuesto General de la Nación, incluyendo ahí, la procedencia del embargo con el fin de garantizar el pago de sentencias judiciales⁶, **no obstante, esa conclusión no es aplicable a todos los casos; ha surgido cuando se ha tenido como fuente de los recursos, los ingresos de la Nación y no los recursos parafiscales.**

Luego, la excepción desarrollada por la Corte Constitucional, según la cual, resulta procedente el embargo cuando se trate del pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, la cual no es aplicable a todos los casos, es potencialmente procedente cuando la fuente de los recursos este compuesta por recursos de la Nación, sin embargo, como quedó claro, los recursos del sistema general de pensiones, no son recursos de la Nación sino parafiscales, que si bien se incorporan al presupuesto general de la Nación, ello únicamente se hace con el fin de estimar la cuantía global. Para comprender este punto, se revisará la naturaleza de esta renta.

Sobre la parafiscalidad, concepto tributario que adquirió rango constitucional con la Constitución Política de 1991, artículos, 150.12 y 338, la Corte Constitucional en la sentencia C 449 del 9 de julio de 1992, precisó:

*“La parafiscalidad es una técnica de las finanzas públicas que nace en Francia y se desarrolla luego en el mundo con diversos contenidos. Sin embargo en todos los casos la parafiscalidad tiene un común denominador: **son recursos extraídos en forma obligatoria de un sector económico para ser invertidos en el propio sector, con exclusión del resto de la sociedad**”*

⁵ Ut supra.

⁶ sentencia c 1154 de 2008 “El Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada. **La primera excepción** tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; **La segunda regla de excepción** tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias; **y la tercera** excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.”

En consecuencia, los recursos del sistema general de pensiones son recursos parafiscales, extraídos de todas las personas que están obligadas a cotizar a la seguridad social para ser invertidos en el reconocimiento pensional. Ahora bien, frente a la inembargabilidad de estos recursos, la legislación ha señalado:

- **Ley 100 de 1993** “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” art. 134. Son inembargables:
 1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
 2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.
- **Ley 1564 de 2012** “Código General del Proceso”. art. 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:
 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en **el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales**, las cuentas del sistema general de participación, regalías y **recursos de la seguridad social**. (...)”

En ese orden, queda claro que el legislador de manera expresa indicó que los recursos destinados a la seguridad social no se pueden embargar. Conviene precisarse en este que numeral 1 del art. 594 del Código General del Proceso fue demandado, siendo así la oportunidad de la Corte Constitucional de pronunciarse frente a la embargabilidad de esta fuente de recursos, sin embargo, mediante sentencia C-543 de 2013⁷, esa Corporación se declaró inhibida para pronunciarse de fondo porque los cargos que formuló el entonces demandante, carecían de certeza y pertinencia y no se desarrollaban un concepto de la violación.

Por lo tanto, se concluye que las cuentas cuyo embargo se pretende constituyen recursos parafiscales con destinación específica, esto es, pago de pensiones, que no hacen parte de los ingresos de la Nación como quiera que tienen una naturaleza especial, no son embargables.

3. DEL CASO CONCRETO

Teniendo en cuenta el anterior marco jurídico, el despacho estima que no se reúnen los presupuestos necesarios para decretar la medida cautelar consistente en el embargo de las cuentas que contienen los recursos parafiscales del sistema de seguridad social en pensiones, porque en primer lugar, el numeral 1 del art. 594 del CGP, es claro en señalar que los recursos destinados a la seguridad social no son embargables y a diferencia del escenario en el que se está en frente de las rentas de la nación, tratándose de parafiscales, no existe excepciones a la previsión legal.

En ese orden, si bien el Despacho entiende que los intereses moratorios se generaron por el pago tardío del reconocimiento del reajuste pensional en los

⁷ *Demanda de inconstitucionalidad. Artículo 594 Ley 1564 de 2012. Bienes inembargables.* Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y **recursos de la seguridad social**.

términos de la sentencia judicial que se ejecuta, lo cierto es que no resulta procedente embargar las cuentas destinadas a la seguridad social en pensiones, con el fin de garantizar el pago de intereses moratorios. En este punto, no se puede pasar inadvertido, que a la demandante le fue reconocido el reajuste a la pensión de jubilación mediante resolución 1071 del 12 de febrero del 2014, pagados el 30 de abril de la misma anualidad un valor de \$47.235.719,00. Razón por la cual, la medida cautelar no gira en torno al cobro del reajuste a la pensión de jubilación sino al cobro de intereses moratorios.

Finalmente, debe indicar el despacho que el demandante se limitó a solicitar el embargo de las cuentas sin fundamentar jurídicamente su pedimento, ni mucho menos argumentar, porque resultaría procedente el embargo, pese a existir una prohibición legal expresa, dada en la Ley 1564 de 2012, art. 594 numeral 1. Aunado a ello, la solicitante tampoco allegó relación de las cuentas objeto de embargo y secuestro, puesto que se limitó a establecer, de manera indeterminada, las entidades bancarias en las que presuntamente la entidad demandada, es titular de cuentas activas. Luego, al relevarse de su carga argumentativa dada por la proscripción legal, el Despacho tampoco puede arribar a otra decisión diferente a la de negar la solicitud de medida cautelar.

En consecuencia, en virtud de lo expuesto, se negará la medida cautelar consistente en el embargo y el secuestro de las cuentas bancarias de la entidad, en las entidades bancarias Davivienda, BBVA, Bancolombia, y Popular.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de medida cautelar de embargo y el secuestro de las cuentas incoada por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriado el presente proveído ingrésese nuevamente al Despacho para seguir con el trámite que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

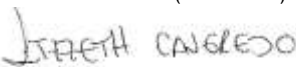
ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

Firmado Por:

**ANDRES
QUINTERO
JUEZ
JUZGADO**


**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes
la providencia anterior hoy **22 DE JULIO DE 2020**, a las ocho
de la mañana (8:00 a.m.)



**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA**

**JOSE
GNECCO
CIRCUITO
026**

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**dab5538cf5b5faff04d3223d617ce886032ba2ab7787d74530f0d6bbda918
5d5**

Documento generado en 21/07/2020 09:03:24 a.m.